

AMPARO.

Juicio seguido ante el juzgado de Distrito de Guanajuato por Gabriel Hernandez y Felipe Fuentes, contra el jefe político de Celaya que los condenó á muerte por ladrones, y dispuso llevar á efecto la pena, no obstante estar pendiente de resolución la solicitud de indulto de los quejosos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que Gabriel Hernandez y Felipe Fuentes con fecha 12 de Noviembre de 1869, ocurrieron pidiendo amparo de la justicia federal contra el C. jefe político de Celaya, que en concepto de ellos violaba en su perjuicio la garantía que otorga la fracción 5ª del art. 20 de nuestro código fundamental, negándose á suspender la pena de muerte á que fueron condenados por robo, con arreglo á la ley de 13 de Abril del mismo año de sesenta y nueve, hasta tanto se lograba que la autoridad competente resolviera sobre el indulto que querian obtener, pues las autoridades á quienes ocurrieron antes de esa fecha no se creían con facultades para decidir sobre tal recurso.

Las primeras diligencias de este recurso se practicaron en Celaya por el C. juez de primera instancia, con arreglo á la ley de 22 de Mayo de 1834, art. 3º, que le otorga estas facultades; diligencias que dieron por resultado la suspension de la ejecucion de la pena de muerte.

Este juzgado, con fecha 16 del mismo Noviembre, declaró no haber lugar al recurso de amparo, fundándose en el art. 8º de la ley de 20 de Enero próximo anterior y en el art. 3º de la ley de 13 de Abril del mismo año. La Suprema Corte de Justicia de la nacion, con fecha 16 de Diciembre revocó este auto, segun declara, por haberse dictado contra ley expresa.

El recurso de amparo intentado por Hernandez y Fuentes, lo ha sido en cuanto á la forma, de absoluta conformidad con lo preceptuado en el art. 4º de la ley de 20 de Enero de 1869. Queda por examinar, si no obstante la ley que se aplicó á los reos al juzgárseles disfrutaban de la garantía que invocan, y en el caso, si en efecto ha sufrido violacion en su perjuicio.

No cabe la menor duda de que la ley de 13 de Abril de 1869, art. 1º, es expresa en consignar la suspension absoluta para los salteadores y plagiaros de las garantías que otorga el art. 20 de la Constitucion federal, y que no les concede, dentro de este artículo, mas que el derecho de defensa, (art. 3º,) del cual los procesados tienen que hacer uso en el término de tres dias que se les demarca en la misma ley.

Los CC. Magistrados de la Suprema Corte han tenido presente, á no dudarlo, que el derecho de defensa es un derecho que reclama la humanidad, y que cualquiera autoridad que en el ejercicio de sus funciones lo limite, cometo, sin cuestion, un atentado contra los derechos naturales del hombre. En esta conviccion los CC. Magistrados proveyeron su auto supremo de diez de Diciembre último, en que declaran: "que no dar curso á la solicitud de indulto concediéndolo ó negándolo, es privar á los solicitantes del derecho de defensa en los momentos supremos en que se trata de privarlos ó no de la existencia, y que esto envuelve una violacion directa de la garantía que reconoce el art. 20 de la Constitucion federal;" de manera, que la Suprema Corte de Justicia da á entender, que el derecho de defensa que el art. 3º de la ley de 13 de Abril les reservó á los reos de estos delitos, lo pueden invocar en el caso de que se trata en estas actuaciones.

La interpretacion de la ley que á primera vista parece tener alguna latitud al darle tal sentido, es no obstante conforme con los principios del derecho natural que deben ser los fundamentales de toda ley, y es

tambien conforme con la regla tan conocida de derecho que manda en todo caso que se restrinja lo que es odioso y se amplíe lo favorable.

En efecto, si se conviene en que los reos á quienes se aplica la ley de 13 de Abril de 1869 disfrutan el derecho de solicitar indulto, es incuestionable que se les deben otorgar los elementos que los sean necesarios para que éste recurso se sustancie y se resuelva, y que cohartarles este derecho, que es la última de sus defensas, implica la violacion de la garantía constitucional que los peticionarios invocan en su recurso.

El Promotor fiscal es tambien de opinion, que los reos de quienes se trata no están comprendidos, para el efecto de resolver sobre su peticion de amparo, en lo que preceptúa el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, pues que su solicitud no tiene por objeto, como bien lo expresa, nada que tenga relacion con el juicio á que los sujetaron, el cual con la sentencia quedó terminado. Se trata únicamente de no poner trabas para que se les oiga en un incidente aparte, que tan lejos está de ser un juicio, como que se resuelve sin contradiccion, y por autoridades que en ningun caso son las judiciales.

Por último, el supremo decreto de 10 de Diciembre derogando el de 16 de Noviembre del mismo año, ha demarcado el camino que se debe seguir en el presente juicio concediendo el amparo que denegó el auto revocado.

Por todo lo cual, y con fundamento de lo que queda expuesto, el Promotor fiscal pide al juzgado se sirva declarar conforme con la solicitud de los peticionarios: que la justicia federal los ampara y protege contra el C. gefe político de Oclaya que viola en perjuicio de ellos la garantía constitucional que expresa la fraccion 5ª art. 20 de la Constitucion federal, y que por consecuencia se debe suspender la ejecucion de la pena de muerte á que los enunciadados reos

han sido condenados, hasta tanto no se resuelva sobre la solicitud de indulto que tienen iniciada; todo lo cual procede en justicia.

Guanajuato, Enero veintisiete demil ochocientos setenta.—*Zenon J. de Velasco.*

Otro sí digo: que no siendo de obligacion de esta promotoria expensar el papel sellado, pide se les notifique á los solicitantes que se repongan estas fojas con las del sello que corresponde, y entretanto se admitan sin este requisito en obvio de mayor perjuicio y demora de la administracion de justicia.

Fecha la misma.—*Velasco.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, Setiembre veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo iniciado en el juzgado de letras de Oclaya, la noche del 12 de Noviembre de 1869, por los reos Felipe Fuentes y Gabriel Hernandez, á virtud de la providencia del C. gefe político de aquel lugar, por la que dispuso que aquellos fueran ejecutados al dia siguiente 13, por haber sido condenados por el mismo funcionario á la última pena, en uso de las facultades que concedia la ley general de 13 de Abril del citado año de 69, que suspendió algunas de las garantías constitucionales, respecto de los salteadores y plagiarios; cuyo juicio, por revocacion que la Suprema Corte de Justicia hizo del auto de este juzgado, fecha 16 del mismo mes de Noviembre, fué continuado y sustanciado conforme á la ley de 29 de Enero del propio año de 69: vistos el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado, el pedimento del C. Promotor fiscal, el alegato de los quejosos, y todo lo demas que fué conveniente; y

Considerando: que fundado el recurso de amparo en que, habiendo interpuesto los

quejosos el de indulto de la pena á que fueron sentenciados, y no habiéndoseles resuelto éste, la providencia del C. gefe político ataca la garantía consignada en la fracción 5ª del art. 20 de la Constitución federal, se hace preciso examinar si los hechos pasaron como los exponen los quejosos, y si en efecto hay la violación de la garantía que invocan: que respecto de lo primero, se registran los telégramas dirigidos por los peticionarios ó en su nombre, al C. presidente de la República, y al C. gobernador del Estado, cuyos funcionarios manifestaron que no era de su competencia el otorgamiento del indulto; registrándose también á fojas 19 el informe del C. gefe político de Celaya, donde se dice: que al notificar á los reos la sentencia de muerte pronunciada por él en 3 de Noviembre, expusieron, que en uso del derecho consignado en la circular de 15 de Setiembre de 1869 iban á solicitar indulto de la autoridad respectiva, por lo que se suspendió la ejecución; pero que como las garantías hechas en tal sentido por los interesados no dieron el resultado que deseaban hasta el 12 del mismo Noviembre, tal circunstancia hizo comprender al C. gefe político, que sin faltar á lo preceptuado en aquella suprema circular, era llegado el caso de ejecutar la pena; de todos cuyos antecedentes se desprende, que habiendo ocurrido los reos á diversas autoridades en solicitud del indulto, se les iba á ejecutar, sin habérselos resuelto que se les concedía ó se les denegaba, pues todo lo que se les contestaba era que no se creían dichas autoridades con facultades para conocer de la solicitud y resolverla en un sentido ó en otro;

Considerando: que supuestos tales antecedentes la autoridad política de Celaya, al disponer la ejecución, violaba la garantía consignada en el art. 20 fracción 5ª del código fundamental de la República, pues aunque ella fué de las suspensiones por la ley de 13 de Abril, tal suspensión, sobre estar subalternada á la que se hizo de las garan-

tías consignadas en el art. 21 y en la 1ª parte del art. 13, no importaba la del derecho de defensa que consignó expresamente la ley en su art. 3º ni tampoco la de la interpretación favorable de tal derecho, para extenderlo mas allá de los tres días del juicio, y para ejercitarlo por medio de la petición de indulto, y de la producción de razones y circunstancias que ameritan su concesión; y si los quejosos no encontraron autoridades con facultad para conocer de su instancia, no obstante la suprema circular de 15 de Setiembre, tal circunstancia no les es imputable á ellos, ni menos cuando la disposición de la circular se tradujo en la ley del congreso de la Unión de fecha 20 del repetido Noviembre de 69.

Considerando por último: que no aparece del referido informe de la autoridad política de Celaya, fecha 20 de Enero de 1870, que se haya denegado á los quejosos el indulto que ella misma reconoce interpusieron, de donde se deduce, que no obstante aquella ley, las cosas han continuado como se hallaban á la fecha de la interposición del recuso de amparo, sin que pueda imputarse á los quejosos que el congreso del Estado no haya vuelto á tomar conocimiento de su instancia.

Por tales razones y consideraciones, de conformidad con el pedimento del C. Promotor fiscal, es de fallarse y se falla: que la justicia de la Unión ampara y protege á los citados Felipe Fuentes y Gabriel Hernandez contra la providencia por la que el C. gefe político de Celaya dispuso que aquellos fueran ejecutados no obstante el haberse acogido al recurso de indulto, declarado por la circular de 15 de Setiembre de 1869. Hágase saber á las partes, librándose el correspondiente exhorto al juez de letras de Celaya para la notificación á los quejosos; sáquense las copias respectivas para su publicación en los periódicos, y fecho, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales.

Así el C. juez de Distrito, primer suplente de este juzgado, lo decretó, mando y firmó por ante mí. Doy fé.—*Antonio Rincon.*—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo, comenzado ante el juez de primera instancia de Celaya, y proseguido ante el de Distrito de Guanajuato por Gabriel Hernandez y Felipe Fuentes, contra el gefe político de Celaya, que los condenó á muerte por ladrones y dispuso llevar á efecto esa pena, no obstante estar pendiente de resolución la solicitud de indulto de los quejosos.

Considerando: que si la ley de 13 de Abril de 1869, segun la que se juzgó á los quejosos, suspendió respecto de los plagiarios y de los ladrones en despoblado, en otras garantías, las á que se refiere el art. 20 de la Constitución federal, no les privó del derecho de defensa: que por lo mismo, esa ley no quitó el recurso de indulto que es una defensa: que antes bien las circulares de 9 de Agosto y 15 de Setiembre, así como la ley de 20 de Noviembre de aquel año, conceden á los plagiarios y ladrones en despoblado la facultad de solicitar indulto, la que nada importaría si los solicitantes fuesen ejecutados antes de resolverse sobre su solicitud: que la dilacion en conceder ó negar el indulto no es un motivo para ejecutar la pena de que esto se pide; pues la solicitud relativa debe resolverse por la autoridad competente del Estado: que disponer la aplicación de una pena de que se ha solicitado indulto antes de que se resuelva sobre la solicitud, es atacar la garantía de la defensa concedida á todo acusado, y por lo mismo importa violación del art. 20 de la Constitución federal; se decreta: que se confirma la sen-

tencia pronunciada el 25 de Setiembre próximo pasado, por el juez de Distrito de Guanajuato, que declara: que la justicia de la Union ampara y protege á los citados Felipe Fuentes y Gabriel Hernandez, contra la providencia por la que el C. gefe político de Celaya dispuso que aquellos fueran ejecutados, no obstante haberse acogido al recurso de indulto declarado por la circular de 15 de Setiembre de 1869.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre treinta de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan, por las menores Petrona y Magdalena Conoh y Manuela May, contra los procedimientos de la gefatura política de Mérida, por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Manifiesta en su adjunto informe el C. gefe político, que cuando el 12 del presente mes tuvo noticia de que las menores Pe-